



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XV LEGISLATURA

Serie B:
PROPOSICIONES DE LEY

13 de marzo de 2026

Núm. 310-1

Pág. 1

PROPOSICIÓN DE LEY

122/000260 Proposición de Ley para el establecimiento de un distrito universitario propio en Cataluña.

Presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(122) Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso.

Autor: Grupo Parlamentario Junts per Catalunya

Proposición de Ley para el establecimiento de un distrito universitario propio en Cataluña.

Acuerdo:

Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2026.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Fernando Galindo Elola-Olaso**.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, a instancia del diputado Josep Pagès i Massó, y al amparo de lo establecido en los artículos 124 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate en el Pleno de esta Cámara, una Proposición de Ley para el establecimiento de un distrito universitario propio en Catalunya.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2026.—**Josep Pagès i Massó**, Diputado.—**Miriam Nogueras i Camero**, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.

PROPOSICIÓN DE LEY PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN DISTRITO
UNIVERSITARIO PROPIO EN CATALUNYA

Exposición de motivos

I

En Catalunya, el acceso y organización de la universidad han evolucionado históricamente en paralelo al despliegue de la autonomía política.

En relación con el acceso, hasta finales de los años 90 el sistema universitario de Catalunya respondió a la lógica de un distrito universitario diferenciado. Los estudiantes de secundaria catalanes accedían prioritariamente a las universidades catalanas en un procedimiento de acceso gestionado integralmente por la Generalitat de acuerdo con un criterio territorial.

El marco normativo se regía por la Ley de Reforma Universitaria de 1983, que reconocía las competencias de las comunidades autónomas en materia universitaria y les permitía, por tanto, la gestión en el acceso universitario, sin en ningún caso imponer un distrito universitario único.

El marco establecido por la LRU permitió a la Generalitat la implantación durante los años 80 y 90 de un sistema universitario que, por la vía de los hechos y sin que estuviera explícitamente reconocido, respondía a la lógica de un distrito universitario propio: territorialidad en el acceso, sistema diferenciado de preinscripción, aplicación de criterios diferenciados dentro del distrito, etc. La movilidad interterritorial de estudiantes existía, pero no estaba configurada como un sistema «abierto» y «homogéneo», tal y como posteriormente se ha configurado; la gestión del ingreso y las prioridades de la organización universitaria se decidían, para Catalunya, desde Catalunya mismo.

A finales de los noventa del siglo pasado se produjo un cambio conceptual importante consistente en la formalización del que la normativa denominó eufemísticamente «distrito abierto», es decir, la posibilidad de solicitar el acceso a la universidad de libre elección con independencia de la universidad donde se hubiese superado la prueba de acceso, y con una implantación gradual y coordinación estatal.

Con el argumento de garantizar la igualdad de oportunidades en todo el Estado, favorecer la movilidad de los estudiantes y evitar sistemas cerrados de comunidades, se promulgaron el Real Decreto 1005/1991, de 14 de junio, por el que se regulan los procedimientos para el ingreso a los centros universitarios, que introduce criterios comunes de acceso para todo el Estado y fija limitaciones al criterio de territorialidad, y el Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a los estudios universitarios. Esta última norma, dictada al amparo de las competencias estatales en títulos académicos y ordenación general del sistema educativo, es la que impone *de facto* el distrito universitario único desde el momento que posibilita a los estudiantes de todo el Estado poder solicitar el ingreso en cualquier universidad pública. El papel de las comunidades autónomas pasa a ser el de gestionar el acceso, pero sin capacidad de regularlo de acuerdo con criterios territoriales.

Estas reformas comportaron una recentralización de competencias en el Estado, quedando para la Generalitat la gestión estrictamente material de la preinscripción universitaria, la oferta de puestos y la ordenación universitaria. No obstante, la Generalitat perdió la capacidad de establecer su política universitaria propia.

El paso definitivo hacia el distrito único se realiza con la entrada en vigor del Real Decreto 69/2000, de 21 de enero, de regulación de los procedimientos de selección para el ingreso a la universidad. Esta norma regulaba en su capítulo III y en la disposición adicional cuarta la implantación del «distrito abierto», que se vinculaba con la movilidad de los estudiantes y se traducía en el efecto práctico de la posibilidad de elección de universidad con independencia de donde se había superado la prueba de acceso. Como consecuencia, se estableció un «distrito único» estatal que suponía la superación de un modelo territorial en favor de un mercado público de oferta universitaria estatal.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, promovida por el gobierno del Partido Popular de José maría Aznar, configuró un nuevo marco general del sistema universitario español caracterizado por las competencias centralizadas, la «coordinación estatal» (un eufemismo para la imposición de criterios del Estado), la desactivación de la autonomía universitaria, etc.). El debate parlamentario de aquel momento evidenció que el «distrito universitario único» pasaba a ser el nuevo referente político-jurídico, ligado a uniformidad, en nombre de la igualdad de acceso y de una supuesta garantía de movilidad.

De forma explícita la exposición de motivos ya hacía referencia a la implantación de un distrito universitario «abierto», configurando la libertad de elección como un derecho de los estudiantes garantizado por el distrito universitario abierto.

La reforma de 2007 (Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades), promovida por el gobierno socialista, no alteró el modelo: reforzar la unidad de acceso, olvidando las competencias de la Generalitat.

Entre el 2008 y el 2014 es una etapa marcada por el Espacio Europeo de Educación Superior en la que se establece la «normativa básica» de procedimientos. El nuevo contexto de ordenación de enseñanzas superiores (EEES) es el pretexto para desplegar una regulación detallada sobre las condiciones de acceso y los procedimientos de admisión a las universidades públicas mediante el RD 1892/2008.

Posteriormente, este régimen se reordena y se actualiza con el RD 412/2014, que explicita su objeto: establecer requisitos de acceso y normativa básica relativa a los procedimientos de admisión en grados.

Finalmente, la LOSU (Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario) viene a reforzar la lógica de coordinación (que en clave estatal equivale a «imposición») del sistema universitario entre administraciones con competencias universitarias. En el ámbito reglamentario, el marco básico vigente se encuentra en el Real Decreto 534/2024, que fija principios generales homogéneos de acceso y admisión a los grados. Esta norma ha sido objeto de una modificación posterior (Real Decreto 482/2025) que no altera el régimen de acceso.

II

Desde principios de siglo, el sistema universitario estatal ha evolucionado hacia una unidad de efectos y movilidad (distrito abierto o único en sentido material), y hacia el establecimiento de unas normas básicas que dejan a las Comunidades Autónomas (y a la Generalitat en particular) en una simple gestión procedimental (calendario, plataformas, asignaciones) dentro del marco común y homogéneo.

La situación actual se caracteriza por la existencia de un distrito universitario único estatal que opera en dos niveles jurídicamente diferenciados. En primer lugar, a nivel estatal, como distrito único material, es decir, como factor homogeneizador bajo el pretexto de garantizar que cualquier estudiante puede solicitar plaza en universidades públicas del conjunto del Estado, con unidad de efectos de las vías de acceso y sin discriminación territorial. En segundo lugar, a nivel catalán, como distrito único procedimental, basado en una prescripción centralizada, comuna y homogénea para al conjunto del sistema universitario catalán.

Este doble plano genera una asimetría relevante: Catalunya ha desarrollado un instrumento administrativo potente, pero sin plenitud normativa, ya que está sometida a una regulación básica estatal detallada que condiciona excesivamente a los criterios de admisión, la arquitectura del sistema y la capacidad de proyección de un modelo universitario adaptado a las necesidades del país.

Es en este punto donde emerge la necesidad de un salto cualitativo: pasar de un distrito único procedimental a un distrito universitario propio de Catalunya, con un reconocimiento normativo explícito en el ordenamiento estatal básico, y que se define como el marco normativo e institucional dentro del cual Catalunya, ejerce con plenitud y coherencia, sus

competencias en materia de universidades, acceso, admisión y ordenación del sistema universitario, sin perjuicio del derecho general de movilidad estatal y europeo.

En ningún caso se trata de crear un «distrito cerrado», ni de excluir estudiantes de otros territorios. Lo que se trata es de dotar de contenido político, jurídico y cultural el sistema universitario catalán, en coherencia con su autogobierno, su realidad lingüística y su realidad académica diferenciada, caracterizada por su riqueza y potencia.

III

La propuesta de establecimiento de un distrito universitario propio en Catalunya se fundamenta en primer lugar en la recuperación y afirmación del autogobierno de Catalunya.

El Estatut d'Autonomia de Catalunya reconoce competencias propias en materia educativa y universitaria, incluyendo la planificación de la oferta de titulaciones, la gestión del sistema universitario y la determinación de los procedimientos de admisión, así como la garantía de la lengua catalana como lengua vehicular.

El sistema actual, aunque reconoce formalmente las competencias autonómicas, ha anulado su eficiencia porque la creciente intervención reguladora del Estado en materia de acceso y admisión universitaria, a efectos prácticos, ha devenido en una especie de «LOAPA» en materia universitaria. Esto genera una tensión en la estructura competencial: el Estado regula exhaustivamente procedimientos y criterios y la Generalitat se ve relegada a una función meramente ejecutiva que minimiza sus competencias.

La creación de un distrito universitario propio permitirá competencialmente a Catalunya adoptar las decisiones estratégicas sobre su sistema universitario, adaptar el modelo catalán a las necesidades sociales, económicas y científicas del país, y en definitiva, consolidar un espacio de decisión coherente con el autogobierno reconocido constitucional y estatutariamente.

Hay que dejar claro que el establecimiento de un distrito universitario catalán no supone una excepción arbitraria al marco constitucional y estatutario. Al contrario, supone la expresión legítima del marco competencial de Catalunya tal y como se configuró en los primeros años de autogobierno, y en definitiva, significa la rectificación de una deriva centralista que no debería haberse producido.

En segundo lugar, el establecimiento de un distrito universitario propio para Catalunya se fundamenta en el desarrollo de la posición singular de la lengua catalana. El artículo 5 del Estatut d'Autonomia de Catalunya establece que el autogobierno se fundamenta también en los derechos históricos del pueblo catalán, de los cuales deriva el reconocimiento de una posición singular de la Generalitat en relación con, entre otras, la lengua catalana (lengua propia de Catalunya, según el artículo 6 del EAC), la cultura, y la proyección de estas en el ámbito educativo, y el sistema institucional en el que se organiza la Generalitat.

El distrito universitario permitirá revertir la situación actual en la que esta posición singular reconocida por el Estatut ha quedado borrada por la normativa básica estatal de acceso y admisión universitaria. Y específicamente para la lengua, permitirá integrar de manera natural y no conflictiva la lengua catalana como eje vertebrador del sistema universitario, garantizando la presencia efectiva en el acceso, la acogida, la docencia y la vida académica y reforzar la universidad como instrumento de continuidad cultural, no solo como prestadora de servicios educativos. En definitiva, el distrito universitario propio, con total respeto por los derechos fundamentales de todos los integrantes de la comunidad universitaria, permitirá dar contenido institucional a una singularidad reconocida normativamente.

En tercer lugar, el distrito universitario propio se fundamenta en la autonomía universitaria, recogida en el artículo 27 de la Constitución, que reconoce el derecho fundamental a la autonomía universitaria y que incluye la capacidad de organización, la definición del proyecto académico y una participación relevante en los criterios de acceso y admisión, y que se contrapone a una regulación básica estatal que ha evolucionado

hacia la homogeneización de los modelos y la reducción de los márgenes de innovación, convirtiendo la autonomía universitaria en una noción formal que es más efectiva.

En contraposición al centralismo homogeneizador, el distrito universitario propio permitirá reforzar el protagonismo de las universidades catalanas en la configuración de un modelo singular, facilitar sistemas de admisión más coherentes con proyectos de excelencia, investigación y transferencia de conocimiento que caracterizan el sistema universitario catalán, y potenciar un ecosistema universitario competitivo internacionalmente y muy arraigado al territorio.

Eso es especialmente relevante en un contexto de competencia global por el talento, captación de investigación y necesidad de flexibilidad institucional.

El establecimiento de un distrito universitario propio es una opción estratégicamente necesaria para el sistema universitario de Catalunya, un modelo que persigue explícitamente la excelencia académica (desde el momento que permitirá adecuar los criterios de acceso a los proyectos universitarios), la innovación (porque ofrecerá una capacidad efectiva de diseñar vías de admisión adaptadas a nuevos perfiles), investigación e internacionalización (posibilitará coherencia entre admisión, formación y captación de talento), cohesión cultural y lingüística (permitirá que la universidad pueda ejercer de pilar del sistema cultural y de progreso de la sociedad catalana).

IV

Entre los motivos que justifican el establecimiento de un distrito universitario para Catalunya no se puede obviar la realidad universitaria actual. El distrito universitario único o abierto, que permite a todos los estudiantes solicitar el acceso a cualquier centro universitario del Estado, con independencia del territorio donde haya cursado los estudios previos, se planteó como una herramienta para garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho de acceso a los estudios universitarios. No obstante, la experiencia acumulada en más de dos décadas demuestra que, en el caso de Catalunya, ha generado unos efectos contrarios al principio de equidad en el acceso a los estudios universitarios de los estudiantes catalanes y al retorno social de la inversión pública en educación superior.

La situación es especialmente grave en los estudios de demanda más alta, como los del ámbito sociosanitario. En las facultades públicas de medicina de Catalunya, el porcentaje de alumnado que proviene de otras comunidades autónomas o del extranjero supone el 40 %. En la Universitat de Lleida o la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, este porcentaje se ha situado en los últimos años alrededor del 70 %, según datos de la Generalitat (2023).

Como consecuencia de lo anterior, la implantación de distrito único ha conllevado que la inversión pública en formación médica que se realiza en las universidades catalanas no revierta en la sociedad catalana, ya que la gran mayoría de los estudiantes del resto del Estado y extranjeros formados con financiación desde las universidades catalanas terminan ejerciendo fuera del territorio catalán.

El derecho del alumnado catalán de acceder a los estudios universitarios de Catalunya en condiciones equitativas también se ve afectado por la desigualdad entre territorios en la valoración académica de los estudios preuniversitarios y en las pruebas de acceso universitarias. Los distintos territorios del Estado divergen ostensiblemente cuanto al nivel de exigencia académica y valoran de acuerdo con criterios distintos, situando el alumnado catalán, que tienen que superar una evaluación más rigurosa, en desventaja para acceder a las facultades de medicina catalanas.

Este fenómeno se produce en un contexto de emergencia lingüística generalizado, pero especialmente intenso en los estudios del ámbito sociosanitario, donde la presencia del catalán en la docencia, las prácticas clínicas y la atención sanitarias es claramente minoritaria. La llegada masiva de alumnado sin conocimientos previos de la lengua agrava esta realidad y el uso del catalán acontece cada vez más residual.

Por todo eso, hay que revisar el modelo actual de acceso universitario, habilitando instrumentos que garanticen una equidad verdadera en el ejercicio del derecho de acceso

a los estudios universitarios de los estudiantes catalanes, y la vía para hacerlo es el restablecimiento de la capacidad de decisión política de Catalunya en materia universitaria mediante la recuperación del distrito universitario propio. Esta es la vía adecuada a la distribución competencial establecida en la Constitución y el Estatut d'Autonomia de Catalunya, permite preservar el derecho de los estudiantes catalanes a formarse y trabajar en su país y garantiza que la inversión pública realizada revierta en la sociedad catalana y de proteger la lengua y el autogobierno en los ámbitos universitario y sanitario.

V

Finalmente, el establecimiento de un distrito universitario propio tendrá que ir acompañado de la transferencia a la Generalitat de Catalunya de la capacidad para expedir y homologar los títulos universitarios.

Por tanto, deberá transferirse, por la vía del artículo 150.2 CE, la capacidad para expedir y homologar los títulos universitarios, actualmente competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.30 CE). Esta transferencia tiene que ir acompañada de la previsión de los medios financieros necesarios.

Para la mayor efectividad de esta transferencia, atendiendo a que en el presente caso la vía adecuada para cumplir esta previsión es la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Generalitat, tendrá que preverse también que por medio de lo establecido en el artículo 150.2 de la Constitución, y en un plazo máximo de 6 meses, se transferirá a la Generalitat de Catalunya la capacidad para expedir y homologar los títulos universitarios.

Proposición de Ley

Se modifica la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, incorporando dos nuevas disposiciones adicionales:

«Disposición adicional (nueva1). *Establecimiento del distrito universitario propio de Catalunya.*

1. En reconocimiento de las competencias de la Generalitat de Catalunya en materia de universidades, así como de la singularidad lingüística y cultural reconocida por su Estatut d'Autonomia, el sistema universitario de Catalunya se articulará como distrito universitario propio, con plena capacidad de ordenación del procedimiento de acceso y admisión a los estudios universitarios oficiales impartidos por las universidades de su sistema.

2. En el marco del distrito universitario propio, la Generalitat de Catalunya podrá establecer, con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad, criterios específicos de admisión, procedimientos comunes y mecanismos de asignación de plazas, garantizando a la vez la movilidad de estudiantes dentro del sistema universitario español y europeo.

3. El ejercicio de esta competencia se llevará a cabo con pleno respeto al derecho fundamental a la autonomía universitaria, asegurando la participación efectiva de las universidades en la definición del modelo de acceso, con el objetivo de promover la excelencia académica, la innovación y la investigación.

Disposición adicional (nueva 2). *Transferencia a la Generalitat de la capacidad de expedir y homologar los títulos universitarios.*

Mediante lo establecido en el artículo 150.2 de la Constitución, y en el plazo máximo de 6 meses, se transferirá a la Generalitat de Catalunya la capacidad para expedir y homologar los títulos universitarios.»

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grup Parlamentari Junts per Catalunya, a instància del diputat Josep Pagès i Massó, i a l'empara de l'establert en els articles 124 i següents del Reglament de la Cambra, presenta, per al seu debat en el Ple d'aquesta Cambra, una Proposició de Llei per a l'establiment d'un districte universitari propi a Catalunya.

Congrés dels Diputats, 24 de febrer de 2026.—**Josep Pagès i Massó**, Diputat.—**Míriam Nogueras i Camero**, Portaveu Grup Parlamentari Junts per Catalunya.

PROPOSICIÓ DE LLEI PER A L'ESTABLIMENT D'UN DISTRICTE UNIVERSITARI PROPI A CATALUNYA

Exposició de motius

I

A Catalunya, l'accés i l'organització de la universitat han evolucionat històricament en paral·lel al desplegament de l'autonomia política.

Pel que fa a l'accés, fins a finals dels anys 90 el sistema universitari de Catalunya va respondre a la lògica d'un districte universitari diferenciat. Els estudiants de secundària catalans accedien prioritàriament a les universitats catalanes en un procediment d'accés gestionat integralment per la Generalitat d'acord amb un criteri territorial.

El marc normatiu es regia per la Llei de Reforma Universitària de 1983, que reconeixia les competències de les comunitats autònomes en matèria universitària i els hi permetia, per tant, la gestió en l'accés a la universitat, sense en cap cas imposar un districte universitari únic.

El marc establert per la LRU va permetre a la Generalitat la implantació durant els anys 80 i 90 d'un sistema universitari que, per la via dels fets i sense que estigués explícitament reconegut, responia a la lògica d'un districte universitari propi: territorialitat en l'accés, sistema diferenciat de preinscripció, aplicació de criteris diferenciats dins del districte, etc. La mobilitat interterritorial d'estudiants existia, però no estava configurada com un sistema «obert» i «homogeni», tal i com posteriorment s'ha configurat; la gestió d'ingrés i les prioritats de l'organització universitària es decidien, per a Catalunya, des de Catalunya mateix.

A finals dels anys 90 del segle passat es va produir un canvi conceptual important consistent en la formalització del que la normativa va denominar eufemísticament «districte obert», és a dir, la possibilitat de sol·licitar l'ingrés a la universitat de lliure elecció amb independència de la universitat on s'hagués superat la prova d'accés, i amb una implantació gradual i coordinació estatal.

Amb l'argument de garantir la igualtat d'oportunitats a tot l'Estat, afavorir la mobilitat dels estudiants i evitar sistemes tancats per comunitats, es promulgaren el Reial Decret 1005/1991, de 14 de juny, pel que es regulen els procediments per a l'ingrés als centres universitaris, que introdueix criteris comuns d'accés per a tot l'Estat i fixa limitacions al criteri de territorialitat, i el Reial Decret 1640/1999, de 22 de octubre, pel que es regula la prova d'accés als estudis universitaris. Aquesta darrera norma, dictada a l'empara de les competències estatals en títols acadèmics i ordenació general del sistema educatiu, és la que imposa *de facto* el districte universitari únic des del moment que possibilita als estudiants de tot l'Estat poder sol·licitar l'ingrés a qualsevol universitat pública. El paper de les comunitats autònomes passa a ser el de gestionar l'accés però sense capacitat de limitar-lo d'acord amb criteris territorials.

Aquestes reformes van comportar una recentralització de competències en l'Estat, restant per a la Generalitat la gestió estrictament material de la preinscripció universitària,

l'oferta de llocs i l'ordenació universitària. No obstant, la Generalitat va perdre la capacitat d'establir la seva pròpia política universitària.

El pas definitiu cap al districte únic és realitza amb l'entrada en vigor del Reial Decret 69/2000, de 21 de gener, de regulació dels procediments de selecció per a l'ingrés a la universitat. Aquesta norma regulava en el seu Capítol III i en la Disposició addicional quarta la implantació del «districte obert», que es vinculava amb la mobilitat dels estudiants i es traduïa en l'efecte pràctic de la possibilitat d'elecció d'universitat amb independència d'on s'havia superat la prova d'accés. Com a conseqüència, es va establir un «districte únic» estatal que suposava la superació d'un model territorial en favor d'un mercat públic d'oferta universitària estatal.

La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, promoguda pel govern del Partit Popular de José María Aznar, va configurar un nou marc general del sistema universitari espanyol caracteritzat per les competències centralitzades, la «coordinació estatal» (un eufemisme per a la imposició dels criteris de l'Estat), la desactivació de l'autonomia universitària, etc.). El debat parlamentari d'aquell moment va evidenciar que el «districte universitari únic» passava a ser el nou referent polític-jurídic, lligat a uniformitat, en nom de la igualtat d'accés i d'una suposada garantia de mobilitat.

De forma explícita l'Exposició de Motius ja feia referència a la implantació d'un districte universitari «obert», configurant la llibertat d'elecció com un dret dels estudiants garantit pel districte universitari obert.

La reforma de 2007 (Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la que es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats), promoguda pel govern socialista, no va alterar el model: reforçar la unitat d'accés, oblidant les competències de Catalunya.

Entre el 2008 i el 2014 és una etapa marcada per l'Espai Europeu d'Educació Superior en la que s'estableix la «normativa bàsica» de procediments. El nou context d'ordenació d'ensenyaments superiors (EEES) és el pretext per desplegar una regulació de detall sobre les condicions d'accés i els procediments d'admissió a les universitats públiques mitjançant el RD 1892/2008.

Posteriorment, aquest règim es reordena i s'actualitza amb el RD 412/2014, que explicita el seu objecte: establir requisits d'accés i normativa bàsica relativa als procediments d'admissió a graus.

Finalment, la LOSU (Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari) ve a reforçar la lògica de coordinació (que en clau estatal equival a «imposició») del sistema universitari entre administracions amb competències universitàries. En l'àmbit reglamentari, el marc bàsic vigent es troba al Reial Decret 534/2024, que fixa principis generals homogenis d'accés i admissió als graus. Aquesta norma ha estat objecte d'una modificació posterior (Reial Decret 482/2025) que no altera el règim d'accés.

II

Des de principis de segle, el sistema universitari estatal ha evolucionat cap a una unitat d'efectes i mobilitat (districte obert o únic en sentit material), i cap a l'establiment d'unes normes bàsiques que deixen a les Comunitats Autònomes (i a la Generalitat en particular) en una simple gestió procedimental (calendari, plataformes, assignacions) dins del marc comú i homogeni.

La situació actual es caracteritza per l'existència d'un districte universitari únic estatal que opera a dos nivells jurídicament diferenciats. En primer lloc, a nivell estatal, com a districte únic material, és a dir, com a factor homogeneïtzador sota el pretext de garantir que qualsevol estudiant pot sol·licitar plaça a universitats públiques del conjunt de l'Estat, amb unitat d'efectes de les vies d'accés i sense discriminació territorial. En segon lloc, a nivell català, com a districte únic procedimental, basat en una preinscripció centralitzada, comuna i homogenia per al conjunt del sistema universitari català.

Aquest doble pla genera una asimetria rellevant: Catalunya ha desenvolupat un instrument administratiu potent, però sense plenitud normativa, ja que resta sotmesa a una regulació bàsica estatal detallada que condiciona excessivament els criteris

d'admissió, l'arquitectura del sistema i la capacitat de projecció d'un model universitari adaptat a les necessitats del país.

És en aquest punt on emergeix la necessitat d'un salt qualitatiu: passar d'un districte únic procedimental a un districte universitari propi de Catalunya, amb reconeixement normatiu explícit en l'ordenament estatal bàsic, i que es defineix com el marc normatiu i institucional dins del qual Catalunya exerceix, amb plenitud i coherència, les seves competències en matèria d'universitats, accés, admissió i ordenació del sistema universitari, sense perjudici del dret general de mobilitat estatal i europeu.

En cap cas es tracta de crear un «districte tancat», ni d'excloure estudiants d'altres territoris. El que es tracta és de dotar de contingut polític, jurídic i cultural el sistema universitari català, en coherència amb el seu autogovern, la seva realitat lingüística i la seva realitat acadèmica diferenciada, caracteritzada per la seva riquesa i potència.

III

La proposta d'establiment d'un districte universitari propi a Catalunya es fonamenta en primer lloc en la recuperació i afirmació de l'autogovern de Catalunya.

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya reconeix competències pròpies en matèria educativa i universitària, incloent la planificació de l'oferta de titulacions, la gestió del sistema universitari i la determinació dels procediments d'admissió, així com la garantia de la llengua catalana com a llengua vehicular.

El sistema actual, tot i reconèixer formalment les competències autonòmiques, n'ha anul·lat la seva eficiència perquè la creixent intervenció reguladora de l'Estat en matèria d'accés i admissió universitària, a efectes pràctics, ha esdevingut una mena de «LOAPA» en matèria universitària. Això genera una tensió a l'estructura competencial: l'Estat regula exhaustivament procediments i criteris i la Generalitat es veu relegada a una funció merament executiva que minimitza les seves competències.

La creació d'un districte universitari propi permetrà competencialment a Catalunya adoptar les decisions estratègiques sobre el seu sistema universitari, adaptar el model català a les necessitats socials, econòmiques i científiques del país, i en definitiva, consolidar un espai de decisió coherent amb l'autogovern reconegut constitucionalment i estatutàriament.

Cal deixar clar que l'establiment d'un districte universitari català no suposa una excepció arbitrària al marc constitucional i estatutari. Al contrari, suposa l'expressió legítima del marc competencial de Catalunya tal i com es va configurar en els primers anys d'autogovern, i en definitiva, significa la rectificació d'una deriva centralista que no s'hauria d'haver produït.

En segon lloc, l'establiment d'un districte universitari propi a Catalunya es fonamenta en el desenvolupament de la posició singular de la llengua catalana. L'article 5 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que l'autogovern es fonamenta també en els drets històrics del poble català, dels quals deriva el reconeixement d'una posició singular de la Generalitat amb relació, entre d'altres, la llengua catalana (llengua pròpia de Catalunya, segons l'article 6 de l'EAC), la cultura, i la projecció d'aquestes en l'àmbit educatiu, i el sistema institucional en què s'organitza la Generalitat.

El districte universitari permetrà revertir la situació actual en la que aquesta posició singular reconeguda per l'Estatut queda esborrada per la normativa bàsica estatal d'accés i admissió universitària. I específicament per a la llengua, permetrà integrar de manera natural i no conflictiva la llengua catalana com a eix vertebrador del sistema universitari, garantir-ne la presència efectiva en l'accés, l'acollida, la docència i la vida acadèmica i reforçar la universitat com a instrument de continuïtat cultural, no només com a prestadora de serveis educatius. En definitiva, el districte universitari propi, amb total respecte pels drets fonamentals de tots els integrants de la comunitat universitària, permetrà donar contingut institucional a una singularitat reconeguda normativament.

En tercer lloc, el districte universitari propi es fonamenta en la l'autonomia universitària, recollida a l'article 27 de la Constitució, que reconeix el dret fonamental a

l'autonomia universitària i que inclou la capacitat d'organització, la definició del projecte acadèmic i una participació rellevant en els criteris d'accés i admissió, i que es contraposa a una regulació bàsica estatal que ha evolucionat cap a la homogeneïtzació dels models i la reducció dels marges d'innovació, convertint l'autonomia universitària en una noció formal més que efectiva.

En contraposició al centralisme homogeneïtzador, el districte universitari propi permetrà reforçar el protagonisme de les universitats catalanes en la configuració d'un model singular, facilitar sistemes d'admissió més coherents amb projectes d'excel·lència, recerca i transferència de coneixement que caracteritzen el sistema universitari català, i potenciar un ecosistema universitari competitiu internacionalment i molt arrelat al territori.

Això és especialment rellevant en un context de competència global pel talent, captació de recerca i necessitat de flexibilitat institucional.

L'establiment d'un districte universitari propi és una opció estratègicament necessària per al sistema universitari de Catalunya, un model que persegueix explícitament l'excel·lència acadèmica (des del moment que permetrà adequar els criteris d'accés als projectes universitaris), la innovació (perquè oferirà una capacitat efectiva de dissenyar vies d'admissió adaptades a nous perfils), recerca i internacionalització (possibilitarà coherència entre admissió, formació i captació de talent), cohesió cultural i lingüística (permetrà que la universitat pugui exercir de pilar del sistema cultural i de progrés de la societat catalana).

IV

Entre els motius que justifiquen l'establiment d'un districte universitari per a Catalunya no es pot obviar la realitat universitària actual. El districte universitari únic o obert, que permet a tots els estudiants sol·licitar l'accés a qualsevol centre universitari de l'Estat, amb independència del territori on hagi cursat els estudis previs, es va plantejar com una eina per garantir la igualtat en l'exercici del dret d'accés als estudis universitaris. No obstant, l'experiència acumulada en més de dues dècades demostra que, en el cas de Catalunya, ha generat uns efectes contraris al principi d'equitat en l'accés als estudis universitaris dels estudiants catalans i al retorn social de la inversió pública en educació superior.

La situació és especialment greu en els estudis de més alta demanda, com les de l'àmbit sociosanitari. En les facultats de medicina públiques de Catalunya, el percentatge d'alumnat que prové d'altres comunitats autònomes o de l'estranger supera el 40 %. A la Universitat de Lleida o la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, aquest percentatge s'ha situat en els darrers anys al voltant del 70 %, segons dades de la Generalitat (2023).

Com a conseqüència de l'anterior, la implantació del districte únic ha comportat que la inversió pública en formació mèdica que es realitza en les universitats catalanes no reverteixi en la societat catalana, ja que la gran majoria dels estudiants de la resta de l'Estat i estrangers formats amb finançament destinat a les universitats catalanes acaben exercint fora del territori català.

El dret de l'alumnat català d'accedir als estudis universitaris de Catalunya en condicions equitatives es veu també afectat per la desigualtat entre territoris en la valoració acadèmica dels estudis preuniversitaris i en les proves d'accés universitàries. Els diferents territoris de l'Estat divergeixen ostensiblement quant al nivell d'exigència acadèmica i valoren d'acord amb criteris diferents, situant l'alumnat català, que ha de superar una avaluació més rigorosa, en desavantatge per a accedir a les facultats de medicina catalanes.

Aquest fenomen es produeix en un context d'emergència lingüística generalitzat, però especialment intens en els estudis de l'àmbit socio-sanitari, on la presència del català en la docència, les pràctiques clíniques i l'atenció sanitària és clarament minoritària. L'arribada massiva d'alumnat sense coneixements previs de la llengua agreuja aquesta realitat i l'ús del català esdevé cada vegada més residual.

Per tot això, cal revisar a fons el model actual d'accés universitari, tot habilitant instruments que garanteixin una veritable equitat en l'exercici del dret d'accés als estudis universitaris dels estudiants catalans, i la via per fer-ho és el restabliment de la capacitat de decisió política de Catalunya en matèria universitària mitjançant la recuperació del districte universitari propi. Aquesta és la via adequada a la distribució competencial establerta a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, permet preservar el dret dels estudiants catalans a formar-se i treballar al seu país i garanteix que la inversió pública realitzada reverteixi en la societat catalana i de protegir la llengua i l'autogovern en els àmbits universitari i sanitari.

V

Finalment, l'establiment d'un districte universitari propi haurà d'anar acompanyat de la transferència a la Generalitat de Catalunya de la capacitat per expedir i homologar els títols universitaris.

Per tant, caldrà que es transfereixi, per la via de l'article 150.2 CE, la capacitat per expedir i homologar els títols universitaris, actualment competència exclusiva de l'Estat (art. 149.1.30 CE). Aquesta transferència ha d'anar acompanyada de la previsió dels mitjans financers necessaris.

Per a la major efectivitat d'aquesta transferència, atenent a que en el present cas la via adequada per a complir aquesta previsió és la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat, caldrà preveure també que per mitjà de l'establert a l'article 150.2 de la Constitució, i en un termini màxim de 6 mesos, es transferirà a la Generalitat de Catalunya la capacitat per expedir i homologar els títols universitaris.

Proposició de llei

Es modifica la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, incorporant dues noves disposicions addicionals:

«Disposició adicional (nova 1). *Establiment del districte universitari propi de Catalunya.*

1. En reconeixement de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria d'universitats, així com de la singularitat lingüística i cultural reconeguda pel seu Estatut d'Autonomia, el sistema universitari de Catalunya s'articularà com a districte universitari propi, amb plena capacitat d'ordenació del procediment d'accés i admissió als estudis universitaris oficials impartits per les universitats del seu sistema.

2. En el marc del districte universitari propi, la Generalitat de Catalunya podrà establir, amb respecte als principis d'igualtat, mèrit i capacitat, criteris específics d'admissió, procediments comuns i mecanismes d'assignació de places, garantint alhora la mobilitat d'estudiants dins del sistema universitari espanyol i europeu.

3. L'exercici d'aquesta competència es durà a terme amb ple respecte al dret fonamental al'autonomia universitària, assegurant la participació efectiva de les universitats en la definició del model d'accés, amb l'objectiu de promoure l'excel·lència acadèmica, la innovació i la recerca.

Disposició adicional (nova 2). *Transferència a la Generalitat de la capacitat per expedir i homologar els títols universitaris.*

Per mitjà de l'establert a l'article 150.2 de la Constitució, i en un termini màxim de 6 mesos, es transferirà a la Generalitat de Catalunya la capacitat per expedir i homologar els títols universitaris.»